



**Pacto Internacional
de Derechos Civiles
y Políticos**

Distr.
RESERVADA *

CCPR/C/81/D/712/1996
18 de agosto de 2004

ESPAÑOL
Original: INGLÉS

COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS

81º período de sesiones
5 a 30 de julio de 2004

DICTAMEN

Comunicación N° 712/1996

<i>Presentada por:</i>	Yelena Pavlovna Smirnova (representada por la abogada Karina Moskalenko)
<i>Presunta víctima:</i>	La autora
<i>Estado Parte:</i>	Federación de Rusia
<i>Fecha de la comunicación inicial:</i>	19 de junio de 1996 (presentación inicial)
<i>Referencias:</i>	Decisión del Relator Especial conforme al artículo 91 del reglamento, transmitida al Estado Parte el 8 de agosto de 1996 (no se publicó como documento) CCPR/C/62/D/712/1996, decisión de admisibilidad adoptada el 2 de abril de 1998
<i>Fecha de aprobación del dictamen:</i>	5 de julio de 2004

El 5 de julio de 2004, el Comité de Derechos Humanos aprobó el proyecto adjunto como dictamen del Comité, emitido a tenor del párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo Facultativo respecto de la comunicación N° 712/1996. El texto del dictamen figura en el anexo del presente documento.

[Anexo]

* Se divulga por decisión del Comité de Derechos Humanos.

Anexo

**DICTAMEN DEL COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS EMITIDO A TENOR
DEL PÁRRAFO 4 DEL ARTÍCULO 5 DEL PROTOCOLO FACULTATIVO
DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
-81º PERÍODO DE SESIONES-**

respecto de la

Comunicación N° 712/1996**

Presentada por: Yelena Pavlovna Smirnova (representada por la abogada Karina Moskalenko)

Presunta víctima: La autora

Estado Parte: Federación de Rusia

Fecha de la comunicación inicial: 19 de junio de 1996 (presentación inicial)

El Comité de Derechos Humanos, establecido en virtud del artículo 28 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

Reunido el 5 de julio de 2004,

Habiendo concluido el examen de la comunicación N° 712/1996, presentada al Comité en nombre de la Sra. Yelena Pavlovna Smirnova con arreglo al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

Habiendo tenido en cuenta toda la información que le han presentado por escrito la autora de la comunicación y el Estado Parte,

Aprueba el siguiente:

Dictamen emitido a tenor del párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo Facultativo

1. La autora de la comunicación es Yelena Pavlovna Smirnova, rusa nacida en 1967¹. Ella afirma que en su caso la Federación de Rusia ha violado los artículos 9 y 14 del Pacto. Está representada por letrado.

** Participaron en el examen de la comunicación los siguientes miembros del Comité: Sr. Abdelfattah Amor, Sr. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, Sr. Franco Depasquale, Sr. Maurice Glèlè Ahanhanzo, Sr. Walter Kälin, Sr. Ahmed Tawfik Khalil, Sr. Rajsoomer Lallah, Sr. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel Rodley, Sr. Martin Scheinin, Sr. Ivan Shearer, Sr. Hipólito Solari Irigoyen y Sr. Roman Wieruszewski.

¹ El Protocolo Facultativo entró en vigor en la Federación de Rusia el 1º de enero de 1992.

Los hechos expuestos por la autora

2.1. El 5 de febrero de 1993, se instruyó sumario contra la autora con arreglo al apartado a) del artículo 93 del Código Penal ruso a raíz de alegaciones de que había estafado a un banco en Moscú al querer conseguir que le dieran crédito poniendo como fianza un apartamento que no era de su propiedad. La autora no se enteró de que habían incoado una acción penal en su contra hasta el 14 de septiembre de 1994 cuando fue detenida por la policía de Moscú. La soltaron 36 horas más tarde.

2.2. El 26 de agosto de 1995, la autora fue detenida nuevamente y puesta a disposición judicial en una dependencia de la cárcel Butyrskaya en Moscú. No fue sino hasta el 31 de agosto de 1995 que se le comunicaron oficialmente los cargos y no se le prestó asistencia jurídica de inmediato. Se deduce de los documentos adjuntos que, a pesar de que se pidió varias veces, no se dio permiso a la letrada para verla hasta el 2 de noviembre de 1995.

2.3. Según la autora, su detención y prisión fueron ilegales ya que fue puesta a disposición judicial después de vencido el plazo dado para concluir la investigación preliminar. Ella explica que en virtud del procedimiento penal ruso los sospechosos sólo pueden ser detenidos a raíz de una investigación oficial. En su caso, la investigación comenzó el 5 de febrero de 1993 y terminó el 5 de abril de 1993, con arreglo al párrafo 1 del artículo 133 del Código de Procedimiento Penal. En el párrafo 4 de ese artículo se dispone un mes de prórroga para la reanudación de investigaciones suspendidas. En virtud de este artículo, la investigación preliminar de la autora se prorrogó seis veces, en tres ocasiones de manera ilegal, según reconoció el fiscal municipal.

2.4. El 27 de agosto de 1995, la autora formuló una denuncia al agente investigador en que ponía en tela de juicio la legalidad de su detención y prisión con arreglo al párrafo 1 del artículo 220 del Código de Procedimiento Penal. El agente no la remitió al tribunal intermunicipal de Tver sino hasta el 1º de septiembre de 1995, incumpliendo la obligación de someter la denuncia a las autoridades judiciales dentro de 24 horas. La autora afirma que el tribunal desestimó la denuncia el 13 de septiembre de 1995 sin haber escuchado la argumentación de las partes, porque no tenía competencia para revisar la legalidad de la detención y prisión, puesto que ya se había terminado de investigar el caso. Ahora bien, en esto se basaba la denuncia de la autora de que su detención había sido contraria a la ley. Sostiene que el tribunal debería haber examinado su caso puesto que en realidad la investigación se había prorrogado y aún no había terminado, si bien, según la autora, en contravención de la ley. Ella no podía interponer recurso de apelación contra la decisión judicial puesto que el artículo 331 del Código de Procedimiento Penal no permite apelar contra una decisión relativa a una denuncia elevada en virtud del artículo 220.

2.5. La autora afirma que, en el momento de hacer la comunicación inicial, todavía no se había fijado la fecha del proceso y que el tribunal había anunciado que su asunto no se examinaría hasta septiembre de 1996. Según la autora, esto contraviene el artículo 223 del Código de Procedimiento Penal, que garantiza la fijación de la fecha del proceso dentro de los 14 días contados desde el inicio de diligencias judiciales.

2.6. La autora sostiene además que padece una grave enfermedad cutánea, vasculitis hemorroidal, y que las condiciones de su detención agravaron su estado de salud. En este

contexto, afirma que en la cárcel no se le proporcionó suficiente comida ni medicación, que se mantenía a 60 reclusas en celdas para 24 y que estuvo recluida junto con autoras de delitos graves. Sostiene que, dado que no tenía antecedentes penales y que no había sido acusada de ningún delito grave o violento, no debió ser puesta en detención preventiva. En cuanto a las condiciones de detención en la cárcel Butyrskaya, se remite al informe del Relator Especial sobre la Tortura, de la Comisión de Derechos Humanos, de fecha 16 de noviembre de 1994². En marzo de 1996, fue trasladada a la sala de un hospital, donde permaneció hasta el 17 de mayo de 1996, fecha en que regresó a su celda.

2.7. En cuanto al agotamiento de los recursos internos, la autora aduce que en el Código de Procedimiento Penal no se prevé la apelación de decisiones relativas al artículo 220. Sin tener la posibilidad de revisión judicial, la autora denunció la ilegalidad de la decisión judicial ante diversas instancias, como el fiscal municipal de Moscú, el Fiscal del distrito municipal de Moscú, el Fiscal General de la Federación de Rusia, el Departamento de Justicia de la ciudad de Moscú, el tribunal municipal de Moscú y el Colegio de Abogados de Moscú. Esos órganos confirmaron que no se podía revisar la decisión judicial. Por otro lado, el Ministerio de Justicia reconoció que la decisión del juez era errónea, pero que no podía hacer nada al respecto sin pruebas de ilícito por parte del juez. El fiscal municipal admitió que se produjeron retrasos burocráticos al investigar el caso de la autora, pero no permitió que fuese excarcelada. Se supone que no había ningún otro recurso disponible.

La denuncia

3. La autora sostiene que al ponerla en detención preventiva se violaron los artículo 9 y 10 y el párrafo 3 del artículo 14 del Pacto, puesto que fue privada de su libertad en contravención de la ley rusa de procedimiento penal, no se le informó con prontitud de los motivos de su arresto ni de ningún cargo en su contra, no se le hizo comparecer sin demora ante un juez o funcionario judicial, y estuvo retenida a disposición judicial a pesar de que no tenía antecedentes penales. También alega que no fue acusada de un delito grave y que no había razón para creer que no comparecería durante la investigación o el proceso. Además, afirma que se le denegó el derecho a un recurso judicial respecto de la ilegalidad de su detención. También invoca los derechos enunciados en los artículos 7 y 10 del Pacto en lo que respecta a las condiciones de detención y la falta de tratamiento médico.

Observaciones del Estado Parte sobre la admisibilidad y el fondo de la cuestión

4. En una nota de fecha 4 de abril de 1997, el Estado Parte dio una "respuesta provisional" a la comunicación. Sostuvo que se había instruido sumario contra la autora por malversación fraudulenta de fondos en gran escala. Explicó que, habida cuenta de la gravedad de la acusación, fue detenida y puesta a disposición judicial, y que ya se había terminado la investigación. El Estado Parte informó de que se había incoado una acción penal contra la autora el 8 de abril de 1996 en el tribunal intermunicipal de Tver, que aún no había terminado. El Estado Parte sostuvo que, como todavía no había terminado el procedimiento penal, la comunicación era inadmisibles por no haberse agotado los recursos de la jurisdicción interna.

² E/CN.4/1995/34/Add.1, párrs. 70 y 71.

Comentarios de la autora sobre las observaciones del Estado Parte

5. En sus comentarios de fecha 24 de abril de 1997 sobre las observaciones del Estado Parte, la autora sostuvo que éste no había examinado su denuncia de detención ilegal y denegación de la revisión judicial de la legalidad de su detención, en violación del artículo 9 y del párrafo 3 del artículo 14 del Pacto. Admitió que el juicio contra ella había comenzado el 8 de abril de 1996, pero afirmó que había durado más de un año sin respetar las garantías procesales y que el tribunal tenía previsto someter el caso a nuevas averiguaciones. La autora indicó que la respuesta del Estado Parte se refería a la causa penal básica contra ella, que no era el motivo de la comunicación que había presentado al Comité. Reiteró que se habían agotado los recursos internos respecto a la denuncia de detención ilegal y denegación de revisión judicial de la legalidad de su detención. También adujo que los tribunales habían seguido rechazando sus solicitudes para que se examinara la cuestión de la licitud de su detención y que no era posible apelar contra la decisión original del tribunal intermunicipal de Tver.

Decisión sobre admisibilidad

6. En su 62º período de sesiones, el Comité dictaminó que la comunicación era admisible y observó que el Estado Parte no había estudiado la admisibilidad de la denuncia de la autora sobre las circunstancias de su detención y que su denuncia no tenía que ver con el juicio en curso sino con su detención y prisión que, según ella, eran ilegales y respecto de las cuales se habían agotado los recursos de la jurisdicción interna. El Comité observó que, en la comunicación podían plantearse cuestiones con arreglo a los artículos 7, 9 y 10 y al párrafo 3 del artículo 14 cuyo fondo había que examinar. Invitó al Estado Parte a presentar explicaciones o declaraciones por escrito en que se pusiera en claro lo planteado en la comunicación. La decisión fue transmitida al Estado Parte el 27 de abril de 1998.

Nueva comunicación de la autora y observaciones del Estado Parte

7.1. El 17 de agosto de 1998, la autora presentó otra comunicación, en que pedía que el Comité examinase nuevas presuntas violaciones de sus derechos con arreglo al Pacto cometidas por el Estado Parte. En la comunicación no se abordaron los asuntos planteados en la primera comunicación, sino cosas que ocurrieron después. La autora afirmó que el 21 de marzo de 1997 el tribunal intermunicipal de Tver había dispuesto que siguiese a disposición judicial mientras se hacían más investigaciones sobre la acusación contra ella. Sostuvo que en un fallo del Tribunal Constitucional de 2 de julio de 1998 se había declarado que el artículo 331 del Código Penal no era válido, lo que implicaba que ella tenía derecho a apelar contra la anterior decisión judicial de seguir investigando su caso; con todo, sobre la base de una lectura restrictiva del fallo del Tribunal Constitucional, el tribunal de Tver se negó a someter a apelación el caso de la autora. Se deduce del expediente que la autora fue excarcelada el 9 de diciembre de 1997, aunque no se explican las circunstancias.

7.2. En una nota fechada el 29 de marzo de 1999, el Estado Parte sostuvo que el 5 de febrero de 1993 se había iniciado una investigación penal por la supuesta participación de la autora en un fraude en gran escala y que, en virtud de las leyes rusas, se trataba de un delito grave. Afirmó que, como la autora había eludido a las autoridades de instrucción, se dictó una orden de detención, se suspendieron las investigaciones durante la búsqueda y se reanudaron una vez que había sido detenida. El Estado Parte adujo que se prorrogó la investigación con arreglo al

párrafo 3 del artículo 133 del Código de Procedimiento Penal y que la prórroga de la investigación no supuso ninguna contravención del derecho nacional. Indicó que en las leyes de procedimiento penal no está previsto hacer comparecer ante el juez u otro funcionario judicial a quien esté en manos de la policía. El Estado Parte sostuvo que durante la detención se informó a la autora de las razones de su detención en 1995 y de los cargos en su contra, y de los motivos para ponerla en prisión preventiva. Este proceso fue revisado, a raíz de la queja que la autora elevó al ministerio público y no se determinó que se hubiese cometido violación alguna del derecho interno. El Estado Parte indica que en diciembre de 1997 ella salió de la detención preventiva y en su lugar se expidió una orden judicial para que no abandonase su domicilio permanente. También indicó que continuaban las actuaciones ante el tribunal intermunicipal de Tver y que aún no se había tomado ninguna decisión debido a que la autora no había comparecido ante el tribunal.

7.3. En sus comentarios sin fecha sobre las observaciones del Estado Parte, la letrada reiteró que en 1995 se procedió a la detención de la autora después de que hubiera expirado el período de investigación y que los tribunales se habían negado a examinar su petición con respecto a la legalidad de su detención. Luego se detalla el desarrollo de su caso en las diversas instancias del sistema judicial del Estado Parte y se afirma que el Estado Parte cometió nuevas violaciones del Pacto desde diciembre de 1997 hasta mayo de 1999 por lo que hace a la duración del juicio en curso, y a su detención y vigilancia policial por segunda vez por las autoridades rusas el 30 de marzo de 1999 (se daba a entender que fue liberada el 4 de octubre de 1999). También se añade que la enfermedad de la autora justificaba su puesta en libertad por razones de salud.

7.4. El 16 de marzo de 2000, la autora presentó al Comité información sobre su tercera detención por las autoridades el 10 de noviembre de 1999 y denunció nuevas violaciones del Pacto por el Estado Parte debido a la continuación y prolongación de las actuaciones judiciales, y la decisión del tribunal de ponerla en detención preventiva. Se desprende del expediente que fue puesta en libertad el 25 de abril de 2000.

7.5. En una nota fechada el 23 de noviembre de 2000, el Estado Parte reiteró que la autora intentó eludir la investigación inicial y que se le formuló la acusación en rebeldía el 5 de abril de 1993. Mientras la buscaban, se suspendió la investigación con arreglo a las disposiciones pertinentes del Código de Procedimiento Penal. El Estado Parte comunicó que la autora había sido interrogada en calidad de acusada el 9 de marzo de 1995. En esa época se le comunicó una decisión sobre los cargos en su contra, a la que adjuntó una nota escrita a mano que decía que ella conocía el texto de la decisión y que impugnaba la acusación. El Estado Parte arguye que la detención de la autora el 26 de agosto de 1995 fue una medida apropiada dada la gravedad de la acusación de fraude y el hecho de que había eludido la investigación inicial del presunto delito. El Estado Parte afirma que el 27 de agosto de 1995 se informó a la autora de su derecho a apelar contra su detención y que ésta tuvo acceso a un tribunal para impugnar la legalidad de su detención; su denuncia de fecha 27 de agosto de 1995 fue recibida en el tribunal intermunicipal de Tver en Moscú el 1º de septiembre de 1995, pero el juez no quiso examinarla. El 9 de diciembre de 1997 el tribunal intermunicipal de Lyubinsky vio una segunda petición relativa a su detención y por orden de un magistrado federal se sustituyó la detención preventiva por una orden de que no abandonara la zona. El Estado Parte también sostiene que, mientras estuvo detenida, se dispensó a la autora la atención médica del caso. Afirma que su enfermedad podría ser motivo de excarcelación, pero sólo si se encontraba en una fase avanzada. El Estado Parte indicó que no pudo verificar si en agosto de 1995 la autora estuvo recluida en una celda

con criminales convictas; la documentación correspondiente había sido destruida en los plazos habituales. También indicó que la autora había sido detenida una cuarta vez, el 28 de agosto de 2000, por incomparecencia.

7.6. El 22 de mayo de 2002, la autora volvió a presentar una comunicación en que insistía en que el Estado Parte no había explicado por qué no se le proporcionó acceso a un tribunal el 13 de septiembre de 1995, o sea, por qué el tribunal no aceptó a trámite su petición, y decía que las condiciones físicas de su detención eran inhumanas. La autora informó de que el 9 de abril de 2002 habían terminado por fin las actuaciones judiciales en su contra.

Gestiones de la autora ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos

8.1. Si bien es cierto que la cuestión no fue planteada por la autora ni por el Estado Parte, el Comité sabe que el 9 de noviembre de 1998, después de su decisión sobre la admisibilidad de la comunicación adoptada el 2 de abril de 1998, la autora elevó una queja ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Tribunal Europeo) que fue inscrita con el N° 46133/99. El Tribunal Europeo deliberó sobre la admisibilidad de la queja el 3 de octubre de 2002. En su decisión, y a efectos del cumplimiento de sus propios criterios de admisibilidad, examinó el hecho de que la autora ya había presentado una comunicación al Comité. El Tribunal Europeo tuvo en cuenta los argumentos de la autora en defensa de la admisibilidad de su queja y declaró lo siguiente:

*"(La autora de la queja) asevera que su recurso interpuesto en Ginebra en 1995 (sic)³ se refería únicamente a los hechos anteriores al mismo, es decir, la imposibilidad de conseguir que se hiciera una revisión judicial de su detención el 26 de agosto de 1995 y, por ende, no podía referirse a lo que había ocurrido más tarde y que se había comunicado al Tribunal en noviembre de 1998."*⁴ (Se ha añadido el subrayado.)

8.2. El Tribunal indicó que la comunicación de la autora al Comité de Derechos Humanos iba:

*"dirigida contra su detención el 26 de agosto de 1995 y, en particular, la cuestión de si estaba justificada, la imposibilidad de que fuera revisada judicialmente y las presuntas malas condiciones de detención. El fundamento real de (su) recurso al Tribunal, pese a que se remonta hasta la detención del 26 de agosto de 1995, es mucho más amplio. Comprende todas las actuaciones judiciales que concluyeron en 2002, y (su) detención en otras tres ocasiones a partir del 26 de agosto de 1995. Se deduce que (su) recurso no es fundamentalmente el mismo que la petición que está pendiente de resolución en el Comité de Derechos Humanos..."*⁵

8.3. El Comité también sabe que, en su decisión de fecha 24 de julio de 2003, el Tribunal Europeo resolvió que se habían cometido violaciones de los artículos 5, 6 y 8 del Convenio para

³ El recurso se presentó el 19 de junio de 1996.

⁴ Página 10 de la decisión.

⁵ Página 11 de la decisión.

la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (Convenio Europeo) y mandó que el Estado Parte indemnizara a la autora por un monto de 6.500 euros.

Deliberaciones del Comité

9.1. La decisión del Comité sobre la admisibilidad de la comunicación de la autora forzosamente se refiere únicamente a lo expuesto en la queja inicial presentada al Comité. Sucede que, después de esa decisión, la autora ha presentado información sobre lo ocurrido más tarde (después del 2 de abril de 1996) y, por consiguiente, antes de examinar estas nuevas denuncias, el Comité de Derechos Humanos, de conformidad con el artículo 87 de su reglamento, debe decidir si son admisibles en virtud del Protocolo Facultativo del Pacto.

9.2. Hay varias consideraciones que se han de tener en cuenta con respecto a la admisibilidad de esas otras comunicaciones. Primeramente, como la autora ha formulado una denuncia ante el Tribunal Europeo es preciso que el Comité examine la cuestión del apartado a) del párrafo 2 del artículo 5 del Protocolo, o sea si "el mismo asunto no ha sido sometido ya a otro procedimiento de examen o arreglo internacionales". En la medida en que lo planteado en las comunicaciones de la autora al Comité se refiere a circunstancias posteriores a la fecha de su primera comunicación al Comité, esas cuestiones le parecen a éste el "mismo" asunto que se sometió al Tribunal Europeo. Esto se desprende del fallo del Tribunal Europeo en que se describieron los hechos expuestos por ella con lujo de detalles. Según el Tribunal, éstos tienen que ver con su detención y encarcelamiento por las autoridades del Estado Parte en cuatro ocasiones distintas. En su denuncia ante el Tribunal Europeo se invocaron el artículo 5 (el derecho a la libertad y la seguridad de la persona) y el artículo 6 (determinación de los cargos penales en un plazo razonable) del Convenio Europeo⁶. No obstante, ya se ha dirimido el caso de la autora ante el Tribunal Europeo y, por lo tanto, el mismo asunto no está sometido a otro procedimiento internacional. El Comité tiene en cuenta que, cuando la autora presentó sus otras comunicaciones el 17 de agosto de 1998, el 16 de marzo de 2000 y el 22 de mayo de 2002 y su comunicación sin fecha de 1999, el mismo asunto estaba sometido al Tribunal Europeo. Con todo, en el texto del apartado a) del párrafo 2 del artículo 5 del Protocolo se exige que, *cuando examine la cuestión de la admisibilidad*, el Comité determine si el asunto ya ha sido sometido a otro procedimiento internacional⁷. La declaración formulada por el Estado Parte con respecto al Protocolo Facultativo no es obstáculo, a diferencia de las reservas de otros Estados Partes, para que el Comité examine las comunicaciones si el mismo asunto *ha sido ya dirimido* por otro procedimiento internacional⁸. Por ende, el Comité considera que el apartado a) del párrafo 2 del artículo 5 no es obstáculo para la admisibilidad en las circunstancias del presente caso.

⁶ También se invocó el artículo 8 (el respeto de la vida privada).

⁷ Comunicación N° 349/1988 (*Wright c. Jamaica*).

⁸ La declaración dice así: "La Unión Soviética también tiene entendido que el Comité no examinará ninguna comunicación a menos que se haya cerciorado de que el mismo asunto no ha sido sometido ya a otro procedimiento de examen o arreglo internacionales y que el individuo en cuestión ha agotado todos los recursos disponibles de la jurisdicción interna".

9.3. El hecho de que el Tribunal Europeo ya ha examinado el caso de la autora sigue siendo pertinente para la cuestión de la admisibilidad en otros aspectos. Con arreglo al artículo 1 del Protocolo, el Comité sólo podrá considerar las comunicaciones de individuos que aleguen ser víctimas de una violación, por un Estado Parte, de los derechos enunciados en el Pacto. El Comité ya ha reconocido que la condición de víctima de una persona a los efectos del Protocolo puede cambiar con el correr del tiempo y que lo que ocurra con posterioridad a la admisibilidad puede remediar la violación⁹. En el presente caso, sucede que la autora no está detenida actualmente y al parecer la principal forma de reparación que podría ofrecer el Estado Parte por la violación de sus derechos sería concederle una indemnización. El Tribunal Europeo ha ordenado el pago de una indemnización en relación con lo ocurrido después del 19 de junio de 1998 (fecha de la primera comunicación de la autora al Comité). En virtud del artículo 41 del Convenio Europeo, el propósito de la indemnización sería la "satisfacción equitativa a la parte lesionada". Estas circunstancias llevan al Comité a pensar que ya no es posible considerar a la autora "víctima", a efectos del artículo 1 del Protocolo, de las violaciones del Pacto presuntamente ocurridas después del 19 de junio de 1998.

9.4. Por consiguiente, el Comité considera que, en la medida en que las comunicaciones de la autora se refieren a lo ocurrido después del 19 de junio de 1998, son inadmisibles con arreglo al artículo 1 del Protocolo. El Comité pasa a examinar el fondo del resto de la comunicación de la autora.

Examen de la cuestión en cuanto al fondo

10.1. Con respecto a la denuncia de la autora de que se le denegó el acceso a los tribunales para impugnar la legalidad de su detención el 27 de agosto de 1995, el Comité observa que el Estado Parte, en sus comentarios de fecha 23 de noviembre de 2000, se refiere únicamente al hecho de que la queja de la autora con respecto a la legalidad de su detención de fecha 27 de agosto de 1995 fue recibida por el tribunal intermunicipal de Tver en Moscú el 1º de septiembre de 1995 (si bien no fue examinada hasta el 13 de septiembre) y de que el juez decidió desestimarla. Se desprende de lo expuesto que el presidente del tribunal desestimó la queja porque ya se habían terminado la investigación y, por lo tanto, el tribunal no tenía competencia para entender en la petición de la autora. El derecho de toda persona privada de libertad a recurrir ante los tribunales para que revisen la legalidad de su detención es un derecho sustantivo y entraña más que el derecho a elevar una petición: contempla un derecho a la debida revisión judicial de la legalidad de la detención. Por ende, el Comité dictamina que el Estado Parte ha violado el párrafo 4 del artículo 9. De igual modo, dado que la decisión del juez de desestimar la petición de la autora el 13 de septiembre se adoptó *ex parte*, el Comité opina que no se hizo comparecer sin demora a la autora ante un juez, en violación del párrafo 3 del artículo 9. A este respecto, el Comité observa con preocupación la exposición del Estado Parte el 29 de marzo de 1999 en el sentido de que en sus leyes de procedimiento penal, por lo menos a la sazón, no se disponía que quien estuviese en detención policial compareciese ante un juez u otro funcionario judicial.

10.2. La autora, al afirmar que no debió haber permanecido detenida antes de ser procesada, invoca el párrafo 3 del artículo 9 que dice que la prisión preventiva de las personas que hayan de

⁹ Comunicación N° 50/1979 (*Van Duzen c. el Canadá*).

ser juzgadas no debe ser la regla general. No obstante, a la luz de su dictamen de que hubo violación del párrafo 3 del artículo 9, el Comité considera que no es necesario examinar estas alegaciones.

10.3. Con respecto a la denuncia de la autora de que no fue informada sin demora de la acusación contra ella, el Comité no considera que el Estado Parte haya conculcado el párrafo 2 del artículo 9 ni el párrafo 3 del artículo 14 del Pacto. Al parecer, tras ser detenida el 26 de agosto de 1995, la acusación formulada contra ella sólo se le notificó oficialmente el 31 de agosto. Ahora bien, al parecer ya se le habían notificado los cargos cuando fue interrogada en septiembre de 1994. El Estado Parte sostiene que fue informada de las razones de su detención y el motivo de su prisión preventiva. En estas circunstancias, el Comité considera que no está en condiciones de determinar que el Estado Parte faltó a sus obligaciones con arreglo al párrafo 2 del artículo 9 o al párrafo 3 del artículo 14 del Pacto.

10.4. En relación con la denuncia de la autora de que no fue juzgada dentro de un plazo razonable, el Comité señala que ha de limitar su examen al período comprendido entre el juicio de la acción penal contra la autora en febrero de 1993 y la fecha de su comunicación al Comité, el 19 de junio de 1996 (véase el párrafo 9.3 *supra*). Es un período de más de tres años. Sin embargo, la autora no ha negado la afirmación del Estado Parte de que ella había eludido a las autoridades durante gran parte de este período. En tales circunstancias, el Comité considera que no se ha violado el apartado c) del párrafo 3 del artículo 14 del Pacto.

10.5. En la comunicación original de la autora se planteaban cuestiones con arreglo al artículo 7 y al párrafo 1 del artículo 10 del Pacto en la medida en que ella afirma que las condiciones físicas de su reclusión constituyeron un trato o pena cruel, inhumano o degradante. La autora ha relatado los pormenores de su detención. En su respuesta, el Estado Parte afirmó que se le dispensó atención médica durante su detención. No dio detalles de las condiciones físicas en que se encontraba. Por consiguiente, el Comité no puede menos que dar el debido peso a la denuncia de la autora. El Comité, en conformidad con su jurisprudencia, considera que la carga de la prueba no puede recaer exclusivamente en ella, habida cuenta de que ella y el Estado Parte no siempre tienen el mismo acceso a las pruebas. Dadas las circunstancias, el Comité opina que las condiciones de la detención de la autora que se describen en su denuncia eran incompatibles con las obligaciones del Estado Parte en virtud del párrafo 1 del artículo 10 del Pacto. En vista de esta conclusión relativa al artículo 10, una disposición del Pacto que se refiere concretamente a la situación de las personas privadas de libertad y prevé para tales personas los elementos indicados en general en el artículo 7, no es necesario examinar por separado las alegaciones formuladas con arreglo al artículo 7 del Pacto.

11. El Comité de Derechos Humanos, actuando en virtud del párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, dictamina que el Estado Parte ha violado los párrafos 3 y 4 del artículo 9, y el párrafo 1 del artículo 10 del Pacto.

12. Con arreglo al apartado a) del párrafo 3 del artículo 2 del Pacto, el Comité considera que a la autora le asiste el derecho a resarcimiento efectivo, incluida una indemnización adecuada por la violación de sus derechos. El Estado Parte también tiene la obligación de adoptar medidas efectivas para asegurarse de que no se repitan violaciones parecidas.

13. Al adherirse al Protocolo Facultativo, el Estado Parte ha reconocido la competencia del Comité para determinar si se ha violado el Pacto y, conforme al artículo 2 de éste, se ha comprometido a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el Pacto y a proporcionar un recurso efectivo y aplicable en caso que se compruebe que ha habido violación. El Comité desea recibir del Estado Parte, en un plazo de 90 días, información sobre las medidas adoptadas para llevar a efecto el dictamen del Comité. También le pide que publique el dictamen.

[Aprobado en español, francés e inglés, siendo la inglesa la versión original.
Posteriormente se publicará también en árabe, chino y ruso como parte del informe anual del Comité a la Asamblea General.]